

Servicio Integrado de Información Arrocera (15 febrero 16)

Nación.com

Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos

POR Gerardo Ruiz Ramón / gerardo.ruiz@nacion.com y POR Esteban Mata / emata@nacion.com

- Afirma que el Servicio Fitosanitario dificulta intercambio comercial bilateral
- Sostiene que esa oficina se maneja bajo criterio político y no técnico

El embajador de Estados Unidos, Stafford Fitzgerald Haney, declaró que la política agrícola del gobierno de Luis Guillermo Solís está tensando las relaciones entre su país y Costa Rica.

Para Haney, esta administración no cumple al 100% los convenios comerciales que regulan la importación y exportación de productos agrarios, por lo que esta área “está causando tensión”, dijo el diplomático en entrevista con La Nación.

En especial, el embajador criticó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), órgano del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Según dijo, esa instancia se ha manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países.

“Lo que me preguntan a mí siempre, cuando yo hablo con la gente de negocios de los Estados Unidos que está pensando en ampliar sus actividades acá o venir por primera vez, es en cuanto al cumplimiento de la ley. Todo el mundo ya reconoce ese esquema. Costa Rica ha firmado muchos convenios aparte del Cafta (TLC) y yo creo que mayormente se cumplen. Pero hay áreas que sí son muy preocupantes”, manifestó.

“Unas de esas áreas donde no se ha cumplido es agricultura. No ha sido fácil. Entendemos que todo país quiere invertir en producción local. Es importante, y en Estados Unidos lo hacemos, pero cuando hay convenios y contratos firmados, hay que seguir las reglas. Y, si

hay algún problema, hay que decir cómo lo trabajamos. Agricultura es un área que está causando tensión”, subrayó Haney.

Oficina del MAG. El diplomático fue crítico con la gestión del Servicio Fitosanitario, a cargo del ingeniero agrónomo Francisco Dall’Anese. Insistió en que esa oficina complica el comercio “ciento por ciento”.

Ese despacho controla la idoneidad de los productos agrícolas que se importan y exportan, así como el registro, el control y la regulación de sustancias químicas y biológicas de uso agrícola.

También, se encarga del control de calidad y los niveles máximos de residuos permitidos de los plaguicidas en los productos de consumo fresco.

“En el pasado, si en Costa Rica había un problema, nos llamaban a nosotros, o a los exportadores o a los importadores para decirnos: ‘oye encontramos algo y no entendemos por qué’, después de haber hecho las pruebas. Hablábamos y ya, pero sobre algo basado en ciencia. Así no había problemas”, reclamó Haney, quien cree que ese aspecto técnico se ha perdido en las resoluciones del SFE.

“Si es más político (el Servicio) no ayuda tanto a Costa Rica ni a la gente que está exportando a los Estados Unidos, ni a la gente que quiere importar. Entonces, eso sí, el lado fitosanitario hay que mejorarlo. Tengo entendido que antes era más profesional de lo que es hoy y eso tiene un impacto”, advirtió.

Entre los productos cuyo ingreso al país ha detenido el Servicio Fitosanitario están el aguacate Hass de México y la papa industrial de Estados Unidos y Canadá.

El cierre de fronteras a la importación del aguacate Hass se hizo bajo el argumento de que podría provocar el ingreso al país de la plaga “mancha de sol”, pero un sector del empresariado nacional lo atribuye a un interés por beneficiar a los productores locales de esa fruta.

El sector privado tiene un criterio similar sobre la decisión del SFE de parar el ingreso de la papa prefrita desde Estados Unidos y Canadá, lo que obliga a los industriales a comprarla aquí para elaborar sus productos.

Los industriales ticos alegan que la papa nacional no es apta para lo que necesitan, y que el freno a la importación desde Norteamérica eleva sus costos de producción.

El embajador Haney parece concordar con ese señalamiento: “A lo mejor sí (hay un tema político-ideológico)”, respondió ante consulta de este diario.

“No lo entiendo muy bien porque, si al final del día lo que se quiere es proveer una vida mejor a la gente más vulnerable, hay que preguntarse por qué en Costa Rica el costo de los productos básicos es mayor que en Nicaragua o Panamá. El proteccionismo, lo hemos visto en Estados Unidos, no siempre es la mejor manera de ayudar”, agregó.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. De hecho, el país le vende mucho más de lo que le compra.

En el 2015, los productores costarricenses vendieron \$3.768 millones al país norteamericano, mientras que este vendió \$1.309 millones aquí, según el Portal Estadístico de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Pide respetar tratados. Haney solicitó a la administración Solís el respeto de los convenios internacionales firmados.

A los ojos de Estados Unidos, el país cumple con el marco legal “mayormente”, siendo el sector agrícola la excepción.

“La única cosa que nosotros hemos pedido del Gobierno de Costa Rica es que, en cualquier convenio que ya tiene, se respete el marco legal. Eso es muy importante. Si yo como inversionista quiero venir, yo quiero saber que las reglas que hay, son las que hay, y que me van a cumplir con esas reglas”, agregó Haney.

Las intervenciones realizadas por el Servicio Fitosanitario no solo provocan tensión con Estados Unidos.

El ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexander Mora, afirmó en relación con el caso de los aguacates Hass, que el MAG y el SFE no respetaron los protocolos internacionales ratificados por el país, que obligan a las autoridades a informar a los socios comerciales con suficiente antelación cuando se va a frenar la importación de un bien.

Este diario pidió el criterio del ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, y del director del SFE, sobre lo dicho por el embajador de EE. UU., pero, al cierre de esta información, no contestaron las consultas formuladas

EDITORIAL

Cambios estructurales en el PIB

- La nueva metodología del Banco Central es una herramienta útil para analizar cuánto crece el PIB en realidad y otros complejos temas económicos y sociales
- Pasamos de ser una economía esencialmente agrícola a otra basada principalmente en servicios y con mayor participación de otros sectores productivos

El nuevo manual del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central, publicado recientemente, permite conocer más a fondo la realidad de los sectores productivos del país, palpar los cambios estructurales que están ocurriendo y analizar las políticas

económicas necesarias para enfrentar los retos actuales y por venir. De momento, tenemos algunas observaciones preliminares.

Lo más notable es que la producción del país ha cambiado. Pasamos de ser una economía esencialmente agrícola a otra basada principalmente en servicios y con mayor participación de otros sectores productivos. El cambio ya se empezaba a notar en la segunda mitad del siglo anterior: la actividad agropecuaria representaba casi una cuarta parte del PIB (23%), la industria un 17%, el comercio un 23% y los servicios solamente un 10%. En el 2012, la estructura productiva había cambiado notablemente: el sector agropecuario descendió a solo un 6%, la industria manufacturera cayó al 15% (después de representar un 23% en 1991), el comercio bajó a un 10% y los servicios se dispararon para representar un 40% del total. No es exagerado decir que nos enrumbamos hacia una economía liderada por los servicios.

Eso tiene implicaciones importantes de aceptación y planificación. Aceptación, por cuanto muchos de los cambios estructurales se producen espontáneamente por la evolución de las fuerzas de oferta y demanda, siempre cambiantes, y la participación de la iniciativa particular, caracterizada por la búsqueda incesante de oportunidades de inversión y rentabilidad. Desde este punto de vista, mal hacen los políticos en aferrarse a la quimera de una economía rural, como la de nuestros bisabuelos, sobre todo cuando se empeñan en protegerla a contrapelo de la nueva economía, mucho más pujante, con un costo importante para el consumidor. Un buen ejemplo son las políticas proteccionistas de ciertos sectores agrícolas, como el arroz y otros granos básicos, aún en boga en el MEIC y en el MAG.

Otras políticas públicas también deben nutrirse de la nueva matriz de insumo, producto del Banco Central. La educación es una de ellas. La queja fundamental del sector empresarial es que escasea la mano de obra calificada mientras que abunda la menos calificada y el desempleo general excede el 9% de la fuerza laboral. Eso exige un cambio de políticas fundamentales en el contenido de los currículos educativos –algunos de los cuales ya se están dando– y enfatizar el aprendizaje práctico en las empresas y el INA, y la reorientación de carreras universitarias de corta duración, entre otras.

También es importante ser más cuidadoso en las políticas de inmigración, pues la entrada irrestricta de extranjeros con habilidades poco calificadas contribuye menos a satisfacer la demanda laboral de la nueva economía y podría intensificar el desempleo. La política fiscal debe reconocer el cambio en las estructuras productivas. El sector más dinámico son los servicios y, sin embargo, están exentos de gravámenes sobre ventas, como otros sectores tradicionales. El sector debería incluirse en la base imponible del eventual impuesto al valor agregado (IVA) como hemos sugerido en varias oportunidades, en el contexto de una reforma fiscal integral.

Los aportes relativos al PIB y sus remuneraciones también llaman la atención y deben ser objeto de reflexión. Por el lado de los aportes a la producción, conocidos en la jerga especializada como el valor agregado, resalta la escasa contribución del Gobierno (incluye los tres poderes del Estado) que contrasta conspicuamente con las amplias remuneraciones de ese sector. Con cifras del 2012, el Gobierno en general contribuyó únicamente con un 16% a la formación del PIB; en cambio, las remuneraciones que pagó a sus servidores representan un goloso 30,2%; es decir, casi el doble.

Esta disparidad indica la poca eficiencia productiva del Gobierno en la utilización de los recursos, la exagerada remuneración a sus servidores en relación con el aporte realizado, o una combinación de ambas. También es posible que su reducida aportación al PIB esté influida por problemas metodológicos de la medición, en especial por el hecho de no valorar sus servicios a precio de mercado. Pero la diferencia es tan grande que amerita revisar a fondo los efectos del gasto y la racionalidad de las remuneraciones. Eso siempre se ha sabido; lo nuevo son las cifras que lo ratifican.

En los aportes a la producción de otros sectores y extracción del ingreso en forma de remuneraciones también hay disparidades relevantes. La más notoria es la de las familias costarricenses que aportan casi un 21% a la producción nacional (también con cifras al 2012), pero reciben apenas un 8% del total. Con independencia de si las remuneraciones son brutas o netas de impuestos y ayudas sociales en efectivo o en especie, lo cierto es que las familias costarricenses, junto con las empresas, efectúan aportes considerables a la conformación del PIB (73,4% del total), pero reciben relativamente menos (58%). Eso contribuye a la mala distribución del ingreso. El gran reto para nuestra sociedad es cómo lograr ser más igualitaria.

Varios factores inciden en la distribución desigual del ingreso. El cambio en la estructura productiva es uno de ellos. La producción se modernizó, pero la fuerza laboral permaneció un tanto rezagada. Influyó, en parte, el proteccionismo laboral que garantiza la estabilidad independientemente del esfuerzo individual, estudio y superación; el desfase en la educación pública frente a las nuevas necesidades productivas; la insuficiente competencia productiva que aún persiste; y la deficiente estructura tributaria que grava proporcionalmente menos a los sectores más dinámicos frente a los punteros de la producción.

Para algunos, el incumplimiento del pago de salarios mínimos es causa fundamental de la mala distribución, al igual que los bajos niveles salariales. Recomiendan mayor fiscalización –lo cual se justifica– e incrementar las remuneraciones en términos reales independientemente de mejorías en la productividad y mayores fuentes de empleo. Pero esa es un arma de doble filo. Las cargas sociales ya son altas y, junto con salarios reales crecientes desligados de la productividad y el crecimiento de la producción, sobre todo en el sector público, podrían generar desempleo privado e informalidad, y deteriorar más la distribución.

En todo caso, la nueva metodología del Banco Central, basada en un promedio móvil a actualizarse año con año, es una herramienta útil para analizar cuánto crece el PIB realmente y otros complejos temas económicos y sociales.

Revista proagro.com

UpaNacional exige políticas estatales más claras a favor del agro

Redacción ProAgro

Una de las mayores preocupaciones del sector agropecuario en Costa Rica es la falta de voluntad política y los altos costos de producción, según se reflejó en el evento Visión 2016.

Raquel Fratti

El evento Visión 2016, llevado a cabo en Costa Rica, resaltó el malestar de los empresarios del sector agrícola por la lentitud del Estado en ofrecer condiciones óptimas para la producción. Guido Vargas, dirigente de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores (UpaNacional) instó a las autoridades estatales a implicarse más en el agro.

“Es importante la participación del Estado, hay una gran necesidad de validación, de materiales nuevos, de materiales más promisorios. Por un lado hay un ofrecimiento muy fuerte de las compañías que producen estas tecnologías, pero por el otro no hay una verdadera implicación del Estado”, advirtió Vargas.

Para Vargas, hay una deficiencia de asistencia técnica, de transferencia de tecnología, de investigación científica, de inteligencia de mercado, y de búsqueda de mercados, y recalcó la importancia de bajar los costos de producción.

“Costa Rica es un país sumamente caro en materia de combustible y en salarios, hay mucha tramitología, tenemos problemas en infraestructura, en puertos, aeropuertos, carreteras, pero además hay una gran incertidumbre en la toma de decisiones”, insistió el dirigente.

Como ejemplo de su malestar con las políticas estatales, citó la oposición de su gremio al ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial que reúne a Chile, Colombia, México y Perú, porque perjudica a los productores nacionales al permitir importaciones agrícolas provenientes de los miembros del bloque.

“Creemos que impacta y afecta a la agricultura nacional, porque se excluyen productos que generan mucho desarrollo y generan mucho empleo para nuestro país”, señaló Vargas, e insistió en que se requieren señales más claras por parte del Estado.

Guido Vargas también expresó cuál cree que es el problema con el que vive Costa Rica en el sector agro.